

CAPÍTULO 6

LA TRANSFORMACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DE LOS SECTORES POPULARES

El mundo obrero (en tanto haya existido como "mundo", en todo caso lo era sobre la base y en la medida de esta preponderancia de lo colectivo) ¿no ha sido minado por un proceso de individualización que disuelve su capacidad para existir como colectivo? ¿No solamente como un colectivo global (la clase obrera con C mayúscula), sino también como un conglomerado de colectivos correspondientes a diferentes formas de condiciones relativamente homogéneas capaces de unificarse en torno a objetivos comunes? [...] ¿Qué le sucede al individuo, y qué puede hacer, cuando es desarticulado de los colectivos protectores? La historia de la clase obrera muestra que los individuos trabajadores han podido acceder a cierta independencia sobre la base de organizaciones colectivas y de su inscripción en colectivos. El análisis de la reestructuración actual de las relaciones muestra que es un proceso inverso el que domina las recomposiciones en curso.

Robert Castel,

"¿Por qué la clase obrera perdió la partida?".

El diablo sabe por diablo, pero más por peronista.

Washington Cucurto,

Cosa de negros.

Durante décadas, y gracias a la extensión de la condición de asalariado, en la Argentina hubo una fuerte tendencia a interpretar las transformaciones de los sectores populares urbanos en sintonía con la historia de los sectores sindicales, y éstos, a su vez, a la luz de los avatares del peronismo. Sin embargo, los cambios económicos y sociales que arrancaron en los 70 y se acentuaron en los 90, reconfiguraron el mundo popular urbano, cuya identidad colectiva se había estructurado en torno a la dignidad del trabajador. Marcado por la desindustrialización, la informalización y el deterioro de las condiciones laborales, este conjunto de procesos fue trazando una distancia creciente entre el mundo del trabajo formal y el mundo popular urbano,

cuyo corolario fue tanto el quiebre del mundo obrero como la progresiva territorialización y fragmentación de los sectores populares. Este proceso, que la sociología argentina contemporánea ha sintetizado como "el pasaje de la fábrica al barrio", señala el ocaso del universo de los trabajadores urbanos, y la emergencia del mundo comunitario de los pobres urbanos.

En este capítulo abordaremos algunas de las dimensiones de las transformaciones sufridas por los sectores populares. La presentación estará basada en el desarrollo de tres ejes mayores, que lejos de ser independientes entre sí, constituyen la trama mayor del mundo popular actual. Nos referimos a las transformaciones y quiebre del mundo obrero, así como a la emergencia de un nuevo tejido territorial; dos cuestiones centrales que no pueden ser abordadas independientemente del análisis de las mutaciones —y la persistencia— del peronismo. Por ello, como ya lo hemos hecho en los capítulos anteriores, realizaremos en primer lugar un breve recorrido por la historia de las clases populares en la Argentina, a partir de la irrupción del primer peronismo.

LA DOBLE CONFIGURACIÓN DE "LO POPULAR"

La teoría social clásica ha elaborado la noción de "clases obreras o trabajadoras" para designar al sector social que ocupa una posición desventajosa en la estructura productiva, caracterizado por la no propiedad de los medios de producción y, en consecuencia, obligado a vender su fuerza de trabajo en el mercado. A esta noción, estrictamente económica, el análisis sociológico suele añadir otras dimensiones igualmente constitutivas; por un lado, la dimensión cultural, que incluye tanto los modelos de socialización como los estilos de vida; por otro lado, la dimensión política, que alude a las formas de organización y la acción colectiva resultante. En consecuencia, en términos analíticos, la acción de las clases trabajadoras en tanto actor de clase, comportaría la articulación de estas tres dimensiones —la económica, la cultural y política—, en tanto esferas propiamente diferenciadas y contrapuestas al otro gran actor de clase, la burguesía o clase dominante.

Sin embargo, la aplicación de este esquema, elaborado en función del desarrollo industrial propio de las sociedades centrales, reveló rápidamente sus insuficiencias en las sociedades periféricas, donde los sectores subalternos constituyen, desde los orígenes de la modernización, un conglomerado más amplio y heterogéneo que el de la sola clase obrera, minoritaria respecto de otras categorías sociales, como el campesinado, las poblaciones indígenas o los sectores informales. Este es el caso de los países latinoamericanos, región en la cual la existencia de un proletariado multiforme y heterogéneo, en el cual se entrecruzan y al mismo tiempo se escinden estructuras y estilos de vida tradicionales y modernos, correspondientes a diferentes modelos culturales y formas del desarrollo económico, constituye una marca de origen, que se continúa durante todo el proceso de modernización sustitutiva y adquiere una nueva configuración en el escenario actual.

Asimismo, la condición dependiente de las sociedades periféricas en relación con los países centrales, tornaría aún más indecible y compleja la problemática acerca del carácter de clase del proletariado latinoamericano. Como afirma Alain Touraine (1988), en las sociedades dependientes, las luchas suelen ser multidimensionales. Esto es, la acción de los sectores populares no estaría determinada de manera exclusiva por el conflicto de clase, sino también por las luchas por la integración nacional y, al mismo tiempo, contra la dominación extranjera. En razón de ello, desde el comienzo, lo popular tendería a designar una resistencia cultural y política, tanto frente a la acción de una clase dominante con notorios resabios feudales, como frente a la dinámica imperialista de los capitales extranjeros.

Finalmente, entre las décadas de 1930 y 1950, el carácter subalterno y la dependencia terminaron por habilitar el llamado nacionalista y desarrollista del proletariado latinoamericano. Este doble llamado encontró su expresión política en el populismo, fenómeno estructurado institucionalmente en torno a un líder carismático y un proyecto nacional basado en una coalición de clases sociales. Así las cosas, dicho proceso signó el éxito de la noción de "pueblo" por sobre la de "clase social". Más simple, el concepto de "pueblo", realidad difícil de acotar y mul-

tidimensional, construida en el cruce siempre ambiguo entre lo social y lo político, entre la clase y la nación, pasó a ser una categoría central del lenguaje político y las ciencias sociales latinoamericanas, designando a los sectores populares como sujeto social y actor colectivo.

Ahora bien, desde la perspectiva del marxismo, hacia los años 60, se elaboraron otras nociones para dar cuenta del carácter multidimensional de la realidad social latinoamericana. Así, la teoría de la marginalidad (Marín, Murmis, Nun, Quijano), a la que ya hemos hecho referencia en el capítulo 3, consideraba que la especificidad latinoamericana en relación con las sociedades centrales, residía en la "masa marginal" o "polo marginal": esto aludía a los múltiples tipos de relación con los medios de empleo, subrayando el carácter deficitario de los mecanismos de integración sistémica proporcionados por un mercado y/o por el Estado. Desde el punto de vista sociológico y económico, estas lecturas tenían el mérito de llamar la atención sobre la existencia de formas de integración y de exclusión diferenciadas, aun si su potencialidad política era cuestionable.²⁶

No obstante, la heterogeneidad de situaciones sociales dentro del mundo urbano latinoamericano terminó siendo un rasgo poco tenido en cuenta en el contexto del modelo de acumulación sustitutivo, frente a la poderosa eficacia simbólica de la interpelación populista. Esto aparece ilustrado de manera emblemática por el caso argentino, puesto que en un contexto de pleno empleo —y más allá de las asimetrías regionales y los bolsones de marginalidad— la pregnancia del modelo nacional-popular fue tal, que durante mucho tiempo se consideró que nuestro país estaba más cerca de las "sociedades salariales" del Primer Mundo, que de otros países latinoamericanos.

Sin embargo, en las últimas décadas, el proceso de desmantelamiento del modelo nacional-popular ha sido de tal envergadura que significó para numerosos individuos y grupos sociales la entrada en la precariedad, si no la pérdida de los soportes sociales y materiales que durante décadas habían configurado las identidades sociales. Como en otros lugares, la política de flexibilización laboral apuntó a la "reformulación de las fronteras del trabajo asalariado" (Palomino:2005), al tiempo que afectó

fuertemente la capacidad de representación y de reclutamiento del movimiento sindical, acelerando con ello el quiebre del mundo obrero. Asimismo, este proceso de pérdida y despojo de derechos se vio agravado por el comportamiento de los grandes sindicatos nucleados en la CCT, cuya adaptación pragmática a los nuevos tiempos desembocó en el apoyo al modelo neoliberal propuesto por el peronismo triunfante, a cambio de la negociación de ciertos espacios de poder. En consecuencia, el pasaje a un nuevo modelo de sociedad supuso una fuerte transformación de las pautas de integración y exclusión social, lo cual se tradujo en la desvinculación de amplios contingentes de trabajadores y la rápida puesta en marcha de un modelo caracterizado por la precarización, la inestabilidad laboral y una alta tasa de desocupación. Así las cosas, estos procesos tienden a actualizar dramáticamente ciertas tesis de la teoría de la marginalidad, elaboradas hace más de cuarenta años, en un contexto de fuerte fragmentación y territorialización de los sectores populares. Sin embargo, antes de detenernos en este proceso, analicemos cuáles fueron los ejes centrales de esa configuración de "lo popular".

PERONISMO, INTEGRACIÓN Y SECTORES POPULARES²⁷

En nuestro país, a diferencia de otros países latinoamericanos, "lo popular" no se identificó con una cultura indígena o campesina, ni tan sólo con una forma de resistencia anticapitalista. Proceso siempre relacional y conflictivo, lo "popular", en la Argentina, se definió efectivamente en oposición a otros grupos sociales. Le tocaría al peronismo, entre 1946 y 1955, llevar a cabo este proceso de configuración de las clases populares, mediante la integración socio-económica y simbólica en términos de "pueblo trabajador", visible en la extensión y reconocimiento de los derechos sociales, asociados al trabajo asalariado. Este proceso conllevó la legitimación de la acción sindical, así como la valorización del mundo del trabajo y, de manera más precisa, de los valores obreristas (James:1990). A esto hay que agregar que el discurso oficial apuntó a desvincular la idea del progreso de la imagen de un país pastoril, agrario, para ligarla a la re-

presentación de una Argentina industrial, cuyo paradigma era el trabajador industrial. En consecuencia, la idea de progreso, componente central del imaginario social argentino, se fue dotando de nuevos contenidos, al ser asociada con otros actores sociales, las clases populares definidas como clases trabajadoras.

Pese a que la experiencia concreta y central del "pueblo" estuvo anclada en la figura del trabajador, ésta no encontró una expresión política completamente "clasista". Es que, en el lenguaje político del peronismo, el trabajador era tanto un "trabajador" como un "descamisado", esto es, a la vez un explotado y un humillado. Además, por lo que hemos dicho más arriba, no se puede reducir la problemática de la dominación social a la sola inteligibilidad clasista. En realidad, y parafraseando a Silvia Sigal y Juan Carlos Torre (1969), la conciencia clasista en la Argentina se obtuvo más en la "plaza" que en la "fábrica", lo cual implica reconocer que, a pesar de su centralidad en la experiencia peronista, el trabajo, en tanto tal, no desempeñó un rol determinante a la hora de definir la dominación social. En consecuencia, en nuestro país, la noción de "pueblo" adoptó un registro político, vertebrada desde el Estado, sobre todo por medio de la fuerte articulación entre los sectores sindicales y los sectores urbanos.

Por otro lado, la definición por oposición condujo a un proceso de polarización política entre peronismo y antiperonismo, que habría de recorrer largas décadas de la política argentina, desembocando en una fuerte esencialización de las identidades sociales. Este proceso de polarización política tuvo una traducción socio-cultural, en la medida en que fue acompañado, desde las clases altas y medias, por la multiplicación de las estrategias de diferenciación social respecto de los sectores populares. Por su parte, desde éstos, la oposición condujo a la exacerbación de los rasgos plebeyos del peronismo. Esto último se hizo visible tanto en la apelación a la cultura del trabajo y el obrerismo, como —muy especialmente— en el lenguaje herético e iconoclasta del peronismo con relación a la cultura oficial, todo lo cual implicó "un trastocamiento de los supuestos concernientes a las relaciones sociales, las formas de deferencia y los acuerdos sobre el 'orden natural de las cosas' y el sentido de los límites de ciertos sectores sociales" (James:1990).

Sin embargo, esa experiencia fuertemente plebeya no terminó por emplazarse ni en una conciencia de clase dura ni en una dimensión comunitaria fuerte, pues una y otra fueron diluidas dentro de una identidad más laxa, definida a la vez por lo político (la identificación con el peronismo) y por el consumo (la vinculación con el estilo de vida de las clases medias). Así, aun cuando es posible hallar elementos comunitarios y clasistas de la conciencia obrera en la Argentina, su debilidad relativa hizo improbable una primacía de la conciencia clasista sobre otras dimensiones.

Por otro lado, si los sectores populares remitían en lo político a una afirmación plebeya, sus aspiraciones de consumo, residenciales y educativas apuntaban más bien al estilo de vida propio de las capas medias, como bien han subrayado Leandro Gutiérrez y Luis A. Romero (1995). En este sentido, la aceleración de la lógica igualitaria en el plano de lo social supuso la extensión del imaginario propio de las clases medias, lo cual encontró eco en las clases trabajadoras "integradas", que, a semejanza de lo ocurrido en ciertas sociedades centrales de la posguerra —Estados Unidos, Europa—, tendieron a autoposicionarse dentro del colectivo heterogéneo de los sectores medios. Asimismo, la presencia de una inmigración extranjera y la ausencia de verdaderas familias obreras (esto es, dos o más generaciones socializadas en una conciencia clasista), no permitieron su verdadera consolidación. Además de la fuerte impronta del imaginario de las clases medias, una importante movilidad geográfica y social impidió el nacimiento de una verdadera comunidad popular, con un estilo de vida propio, esto es, la constitución de un grupo social cerrado y altamente combativo, como en el caso paradigmático de la clase obrera inglesa.²⁸

Por último, es necesario tener en cuenta que el modelo del peronismo histórico presentaba dos vías heterogéneas, pero en gran parte complementarias, de integración social: la primera se apoyaba sobre la figura del *trabajador*, mediante la afirmación de los sectores obreros como fuerza social nacional y de la consolidación de valores como la justicia social y la dignidad del trabajo; la segunda apuntaba a la figura del *pobre*, históricamente desposeído, por medio de las políticas sociales compensatorias. En consecuencia, esta doble vía conllevaba tanto la puesta

en ejercicio activo de los derechos del trabajador y del seguro social (por medio de las obras sociales) como el mantenimiento y el reforzamiento de principios asistencialistas y clientelares (como aparecía reflejado en las provincias del interior o a través de la Fundación Eva Perón). Sin embargo, la figura del pobre se constituía como una prolongación casi natural de la imagen del "pueblo-trabajador", pues ahí donde la intervención social del Estado se manifestaba como insuficiente, la beneficencia emergía con el fin de colmar tales vacíos sociales. Pero mientras que el Estado regulador se erigía como mecanismo "impersonal" de redistribución, la beneficencia guardaba un carácter personalizado y discrecional. La posterior crisis y quiebre de las bases industriales del peronismo potenciaron sin duda los elementos claramente asistencialistas, ya presentes en la matriz original.

Ciertamente, la desarticulación del mundo de los trabajadores urbanos, iniciada en los 70 y consumada en los 90, trajo aparejados profundos cambios en la experiencia popular peronista. Recordemos que, básicamente, el peronismo fue el gran lenguaje político que permitió, desde la experiencia popular, desactivar (a veces mediante una cultura plebeya, otras veces mediante las referencias igualitarias) la verticalidad del vínculo social. Desde 1945, pasando por el largo período de proscripción política y aun durante los 80, con la primera gran derrota electoral del Partido Justicialista, el peronismo continuó siendo en los sectores populares una estructura activa que poseía la capacidad de organizar la experiencia cotidiana, a la vez política y privada. Sin embargo, durante los 90, el peronismo dejó de ser el principio de articulación entre una identidad obrera, un sentimiento nacional y una conciencia popular. Cada uno de estos elementos fue debilitándose y disociándose de los otros: la identidad obrera, relativamente débil en la Argentina, entró en crisis con la transformación del mercado laboral, la precarización y la inestabilidad de las trayectorias laborales. El sentimiento nacional fue diluyéndose, en tanto y en cuanto las demandas populares no encontraron correlato en un programa de políticas públicas, que apuntara a la integración social y nacional. La conciencia popular fue desdibujándose a medida que la heterogeneidad social fue multiplicando los registros de desi-

gualdad, y que las divisiones ideológicas comenzaron a reducirse a diferencias respecto de la implementación de políticas, o cuestiones de orden ético en torno de un único modelo socio-económico. En fin, el peronismo fue perdiendo la capacidad de articular las diversas dimensiones de la experiencia social y política. De esta manera, dejó gradualmente de ser un mecanismo activo de comprensión de lo social, a partir del cual los sectores populares inteligían la dominación; más aún, una manera consensual y plebeya de ver el mundo "desde abajo", para reducirse a un dispositivo de control y dominación política de los sectores populares, por medio de las diferentes y nuevas formas de intervención territorial. Veamos, entonces, el alcance de esas mutaciones.

DESCOLECTIVIZACIÓN Y TRANSFORMACIONES DE LA SUBJETIVIDAD POPULAR

A partir de los años 70, la dinámica desindustrializadora y el empobrecimiento del mundo popular originaron un proceso de descolectivización, que fue traducéndose en profundos cambios dentro del tejido social popular. Este proceso, que afectó a las clases trabajadoras argentinas, no ocurrió en una secuencia única, sino más bien fue desarrollándose en diferentes fases o momentos. A su vez, la dinámica descolectivizadora tuvo profundas implicancias, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo, en el nivel social como en el cultural.

En primer lugar, desde un punto vista objetivo, para un sector de los trabajadores menos calificados de la clase trabajadora formal (Beccaria:2002), el proceso de descolectivización arrancó en 1976, con la última dictadura militar y se fue acentuando a lo largo de los primeros gobiernos democráticos. Así, ya en este período, no fueron pocos los trabajadores que se vieron excluidos del mercado formal, y que comenzaron a desplazarse hacia actividades propias del sector informal, a partir del trabajo por cuenta propia o en relación de dependencia. En términos de acción colectiva, este proceso de pauperización de las clases populares aparece ilustrado por las tomas ilegales de tierras (asentamientos), que se desarrollaron desde fines

de la dictadura militar y durante los primeros años del gobierno de Alfonsín. Ahora bien, como sostiene Denis Merklen (2001, 2005), los asentamientos expresan la emergencia de una nueva configuración social que pone de manifiesto el proceso de inscripción territorial de las clases populares. Ligadas a la lucha por la vivienda y los servicios básicos, esas acciones fueron construyendo un nuevo marco y, a la vez, un entramado relacional propio, cada vez más desvinculadas del mundo del trabajo formal. Una de las primeras consecuencias de esta inscripción territorial es que el barrio fue surgiendo como el espacio natural de acción y organización, y se convirtió en el lugar de interacción entre diferentes actores sociales reunidos en comedores, salas de salud, organizaciones de base, formales e informales, comunidades eclesiales, en algunos casos, apoyadas por organizaciones no gubernamentales. En fin, el surgimiento de nuevos espacios organizativos dentro del barrio conoció un nuevo impulso, aunque fugaz, durante los dos episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1990, visibles en la proliferación de ollas y comedores populares.

A esta primera ola desindustrializadora, le sucedió una segunda, ya bajo el gobierno de Menem, a partir de 1990-1991, a raíz de la implementación de una serie de reformas estructurales encaminadas a abrir la economía, privatizar las empresas públicas, descentralizar la administración pública y controlar la mano de obra mediante la flexibilización laboral. Esta segunda ola, de carácter más vertiginoso y general, afectó tanto a los trabajadores del cordón industrial del Conurbano Bonaerense, en donde residían gran parte de las firmas industriales del país, como a los empleados dependientes de la órbita del Estado. Durante este período, los individuos tendieron a buscar un refugio en las actividades informales y precarias, acentuando con ello la inestabilidad de las trayectorias laborales. En parte, sobre todo en las provincias, la dinámica descolectivizadora fue contenida por el aumento del empleo público (Beccaria:2001) y la distribución discrecional de recursos provenientes de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Este momento se caracterizó también por intensos procesos de movilización colectiva, sobre todo encabezados por los empleados

del Estado, los docentes y los jubilados. La mayor expresión de estos conflictos fue sin duda el "santiagueño", estallido social ocurrido en 1993, que promovió la intervención activa del Estado nacional, el cual distribuyó ingentes recursos y creó empleo público.

Por último, en 1995, con el "efecto Tequila", se inició una tercera ola, que abrió una nueva etapa de crisis económica y desempleo. Sin embargo, la recesión económica se instaló sobre todo a partir de 1998 (Bayón y Saraví:2002), lo cual terminaría por acelerar el proceso de expulsión del mercado de trabajo y el aumento de la inestabilidad laboral. El período señala también la emergencia de nuevas formas de resistencia colectiva surgidas en el interior del país, donde se producen los primeros piquetes y el levantamiento de comunidades enteras, que luego desembocarán en el surgimiento de un conglomerado de organizaciones de desocupados.²⁹ Ambos procesos encontrarán una nueva vuelta de tuerca durante la crisis de 2001-2002.

El proceso de descolectivización fue diferente, según las regiones y las provincias. Así, mientras la desindustrialización tocó tempranamente los grandes polos de desarrollo económico, como Córdoba, Rosario y el Conurbano Bonaerense, no sucedió lo mismo en ciertos enclaves productivos en el interior del país, que fueron afectados más tarde, en los 90, a raíz del proceso acelerado de privatizaciones y la crisis de las economías regionales. No por casualidad, los primeros piquetes y movilizaciones tuvieron lugar en las lejanas localidades petroleras (Cutral-Co y Plaza Huincul, en Neuquén; Mosconi y Tartagal, en Salta), allí donde la experiencia del desarraigo fue vertiginosa y radical, visible en el brusco desmantelamiento de los marcos culturales y sociales que habían orientado la vida de varias generaciones de trabajadores.

Asimismo, este conjunto de transformaciones se inserta en un escenario laboral que da cuenta del aumento de la productividad, producto tanto de la modernización tecnológica como de la ostensible reducción de los costos de la mano de obra, a través del deterioro de las condiciones de trabajo, vía la implementación de la flexibilización y la precariedad laboral. Así, como señala Beccaria (2002), la mayoría de los nuevos empleos creados en los 90 se caracterizan tanto por la precariedad,

como por su escasa o nula cobertura social y desprotección con relación al despido. En fin, las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, indican que en la última década, el "costo laboral" descendió nada menos que un 62%.

En términos de subjetividad política, la descolectivización se revistió de otras dimensiones. El rol que desempeñaron los sindicatos en este proceso de desestructuración subjetiva fue mayor. En efecto, la subordinación de una gran parte de los sindicatos (a excepción del sector estatal) a las orientaciones del gobierno justicialista no tardó en generar una gran desorientación en los individuos, algunos de ellos desgarrados por los dilemas planteados por la identidad peronista y, al mismo tiempo, sometidos a la dura tarea de preservar los marcos sociales y familiares que procuraban sostener una cierta "rutina" o "normalidad" cotidiana. En todo caso, no fueron pocos aquellos que, provenientes del mundo popular, resultaron abandonados literalmente por sus sindicatos, a la hora de afrontar el desmantelamiento —muchas veces abrupto— del modelo de relaciones sociales en el cual se habían socializado (aumento de la precariedad, rotación laboral, informalidad o desocupación plena, sin más).

Por otro lado, en términos subjetivos las transformaciones del mundo popular tampoco son ajenas a los importantes cambios que afectan los procesos de redefinición de la subjetividad en las sociedades contemporáneas. En efecto, los cambios estructurales de las últimas décadas generaron un proceso de desinstitucionalización que repercutió sobre las identidades laborales, al tiempo que produjo una fuerte crisis de las identidades políticas, tal como éstas eran entendidas tradicionalmente. Sin embargo, a estos procesos hay que sumar las consecuencias que tuvo la expansión de las industrias culturales en el proceso de socialización de las clases populares, en la medida en que esas industrias fueron portadoras de nuevos modelos de subjetivación que no estarían anclados ni en la relación con el trabajo ni en la conciencia política peronista, sino más bien en la pura identificación con nuevas pautas de consumo.

Nada ilustra mejor las transformaciones de los procesos de subjetivación e integración del universo popular que la situa-

ción de las jóvenes generaciones. En efecto, la experiencia de los jóvenes pone de manifiesto, con mayor radicalidad, la desaparición de los marcos sociales y culturales que definían al mundo de los trabajadores urbanos y la emergencia de nuevos procesos, profundamente marcados por la desregulación social, la inestabilidad y la ausencia de expectativas de vida, así como por la gran difusión de las nuevas subculturas juveniles, producto de la globalización de las industrias culturales y la influencia de los medios masivos de comunicación. Así, los modelos de subjetivación que fueron cobrando importancia en los procesos de construcción de las identidades se distancian de los roles sociales y profesionales (con los cuales se establece una relación instrumental), y remiten cada vez más a nuevos registros de sentido centrados en el primado del individuo, en la cultura del yo y en los consumos culturales. El resultado de ello ha sido la emergencia de identidades sociales más volátiles y más débiles que antaño, menos definidas por la pertenencia a colectivos sociales y políticos, si bien fuertemente marcadas por una matriz conflictiva de las relaciones sociales.

A fin de comprender sólo algunas de las transformaciones aquí enunciadas emprenderemos un doble camino: el primero de ellos nos llevará a abordar los cambios en las subjetividades dentro del mundo popular, a partir del declive del mundo obrero y la importancia creciente de otros ejes de identificación; el segundo buscará internarnos más bien en la trama social del mundo organizacional de los pobres urbanos.

LAS NUEVAS RELACIONES LABORALES: JUVENTUD Y LÍMITE DE LA INSERCIÓN

En la sociedad actual, los jóvenes constituyen el sector más vulnerable de la población, pues vienen sufriendo los múltiples efectos del proceso de desinstitucionalización (crisis de la escuela, crisis de la familia), así como la desestructuración del mercado de trabajo que caracteriza a la Argentina en los últimos quince años. En mayo de 1995, cuando el país alcanzó su primer record histórico de desempleo (18%), la desocupación de los jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires alcanza-

ba el 34,2% (Jacinto:1997). En noviembre de 1999, los jóvenes desocupados (de entre 15 y 24 años) duplicaban la tasa nacional de desempleo, alcanzando el 27%. Las cifras indicaban también que el 40% de los jóvenes estaban bajo la línea de pobreza. Sin embargo, datos más recientes señalan que 6 de cada 10 jóvenes son pobres; esto es, 5.500.000 personas entre 15 y 29 años (Alerta Argentina:2004). Por otro lado, en muchos casos, a la falta de calificación laboral se le suma la ausencia de oportunidades educativas, en un contexto en el cual la escuela —cuyo deterioro y crisis es visible— también aparece como un fiel reflejo de una integración cada vez más lejana. El resultado ha sido el incremento de la deserción escolar, que estadísticas recientes sitúan en un 25% para los jóvenes entre 15 y 19 años de todo el país. En provincias del noroeste, como en Tucumán, según el Indec, la cifra alcanza el 34%.

Así las cosas, el mundo laboral en el cual deben insertarse los jóvenes aparece sacudido por diferentes transformaciones: económicas (desindustrialización y pasaje a una economía de servicios); laborales (cambios en el interior de las empresas; reemplazo por un modelo posfordista de organización del trabajo) y sindicales (descrédito y pérdida de peso de los sindicatos). Salvo excepciones, este mundo laboral no tiene otra cosa para ofrecer que diversos grados de vulnerabilidad, sobre todo si se toma en cuenta que las nuevas políticas de empleo desarrolladas por las empresas han apuntado a la población joven, considerada como "más maleable" y menos "problemática" que las franjas etarias socializadas en el modelo anterior de relaciones laborales. Por ello, en la medida en que la deseada capacidad de adaptación juvenil encuentra su correlato en la escasa resistencia y la falta de organización político-sindical, los jóvenes se constituyeron en el *target* ideal de la política de flexibilización y precariedad laboral.

Este proceso ha tenido varias consecuencias, sobre todo en lo que se refiere a la conciencia de los derechos sociales. Por un lado, la noción misma de "derechos sociales", tan cara a los trabajadores de otras épocas y tan recurrente en el lenguaje sindical peronista, tiende a desdibujarse aceleradamente. Por otro lado, tanto la fragmentación salarial como la existencia de un contingente vasto de desempleados que oficia como fuerza dis-

ciplinadora, conspiran contra su posible reactualización. Por último, también hay que señalar que el rápido desdibujamiento de la existencia de derechos sociales se halla ligado a la consolidación de la inestabilidad laboral, que, en algunos casos, abarca ya dos generaciones. Así, para muchos de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, la inestabilidad laboral no constituye algo nuevo, en la medida en que ésta ya ha sido experimentada por los padres, desde mediados de los 80. En este contexto, los jóvenes tienden a naturalizar la situación de inestabilidad, sin avizorar en su futuro otra cosa que la precariedad duradera (Kessler:2004, p. 33).

En fin, los jóvenes ingresan en el mercado laboral en una época en la cual el debilitamiento del peronismo en la cultura popular coexiste con la fuerte afirmación de una cultura de masas comandada por un mercado globalizado. A la erosión de los clivajes políticos tradicionales la acompaña la caída de las antiguas estrategias de distinción cultural. Así, el proceso de subjetivación se realiza en un escenario atravesado por la incertidumbre y la inestabilidad, prontamente naturalizado, que impulsa a los jóvenes de los sectores populares (así como a aquellos de las clases medias empobrecidas), a desenvolverse como verdaderos "cazadores" (Merklen:2000) en una ciudad cada vez más caracterizada por la multiplicación de fronteras sociales, en la cual el individuo debe procurarse recursos para sobrevivir, sin posibilidad alguna de planificación reflexiva de la vida. En no pocos casos, la desaparición de los marcos normativos también ha contribuido a crear una frontera difusa entre la legalidad y la ilegalidad, en una realidad por demás híbrida en la cual se yuxtaponen la experiencia de la desorganización social y la multiplicación de las estrategias de sobrevivencia (Kessler:2004).

En lo que respecta específicamente al mundo laboral, los efectos de la nueva política empresarial se reflejan de manera paradigmática en los sectores "modernos" de la economía, cuya expansión se vio favorecida en los 90. Esto puede ser visto a través de dos ejemplos: por un lado, las fábricas automotrices (que durante el período de convertibilidad gozaron de un régimen de protección especial); por el otro, los grandes supermercados. Más aún, pese a la distancia abismal que existe entre estos

dos sectores tanto en términos de legado sindical e identidad laboral como en tradición de lucha,³⁰ podemos afirmar que ambos registran una evolución similar, en lo que respecta a las dificultades de emergencia de una subjetividad popular anclada en la identificación con el mundo del trabajo.

Así, la evolución del sector automotor, rama de la metalurgia históricamente considerada como la "columna vertebral del peronismo", suerte de paradigma de la aristocracia obrera, ilustra algunas de las consecuencias que este nuevo modelo de relaciones laborales tiene, a partir de la emergencia de un nuevo perfil de trabajador. En efecto, frente a las nuevas condiciones de trabajo que se imponen en el sector, los jóvenes suelen definirse a distancia de los tres ejes mayores que constituyeron la identidad del trabajador metalúrgico tradicional: esto es, no sólo a distancia de la política (peronista) y del sindicato (que aparecía muy desprestigiado), sino también del trabajo en sí, con el cual mantienen una relación instrumental. Así, en la medida en que el trabajo ofrece un horizonte de integración relativa y muy inestable, la fábrica deja de ser el lugar en el cual se inscriben las expectativas de vida de los trabajadores. Más aún, despojado de sus atributos anteriores (la estabilidad) y cada vez más excepcionalmente considerado como motor del progreso social, el espacio laboral tiende a ser desvalorizado en términos de "cultura del trabajo" y, por ende, como fuente de "dignidad" y "orgullo del trabajador".

Como pudimos observar en un estudio de caso realizado entre 1996 y 1998, en la Unión Obrera Metalúrgica de la seccional de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela (Svampa:2000), esta realidad suele crear fuertes tensiones entre el sindicato y los jóvenes trabajadores. En efecto, allí donde los delegados sindicales perciben con mayor temor la impronta revulsiva de la desintegración del viejo modelo es en el terreno de las nuevas "bases" sociales: esa masa despolitizada, apática y difusa, que no es ni peronista, ni sindicalista, y que, en verdad, tampoco se identifica con el colectivo "trabajadores". Por ello mismo, y pese a las brechas abiertas en el modelo sindical tradicional, a raíz de las nuevas modalidades de trabajo, el sindicato busca proyectar un modelo identitario definido por la adhesión al peronismo, el orgullo de ser metalúrgico y la apelación al legado sindi-

cal. Así, las estrategias de persuasión dirigidas a los jóvenes trabajadores incluyen un discurso, a la vez de corte pedagógico y normativo, en torno de los derechos del trabajador: la cultura del trabajo, el orgullo sindical, la solidaridad social y, por supuesto, el reconocimiento del lugar que estaría ocupando todavía el peronismo en la vida de los trabajadores, los cuales se constituyen en la contracara inevitable de la despolitización juvenil y de la afirmación individualista del consumo. Sin embargo, todo ello se da en un marco de hondas transformaciones económicas, sociales, organizativas e industriales, que desbordan de manera elocuente la voluntad política de los actores, al confrontarlos a un escenario cotidiano en la cual se multiplican los accidentes de trabajo, la aceptación de pautas flexibilizadoras y, en no pocos casos, los despidos masivos. Ante tamaño desajuste entre discurso normativo y realidad laboral, no resulta extraño que la situación adquiera connotaciones verdaderamente esquizofrénicas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la irrupción del neoliberalismo en el mundo laboral fue tan violenta que, ciertamente, parecen quedar pocos vestigios acerca de esa supuesta edad de oro que representó el modelo peronista, que articulaba, entre otros elementos, bienestar social, derechos sociales y orgullo del trabajador industrial. Uno de los rasgos más notorios es que los jóvenes tienden a reorganizar su subjetividad en función de otros ejes, que le procuran una mayor sensación de realización personal: por ejemplo, la identificación con algún tipo vestimentario o un ritmo musical otorga la ocasión para definir positivamente nuevas afiliaciones y pertenencias, desde las cuales afirmarse e involucrarse imaginariamente. Asimismo, en esta línea, los jóvenes trabajadores tienden a desarrollar un tipo de solidaridad expresiva, que pone de relieve la importancia de los lazos afectivos (los sentimientos) sin tanto adartamiento como sus mayores, pero sin que ello desemboque necesariamente en la construcción de una solidaridad de tipo laboral. En suma, la acción más "espontánea" y expresiva de los jóvenes señala menos una confrontación generacional que un abismo entre dos universos sociales y culturales: detrás y más allá de las críticas que los "viejos trabajadores" o el sindicato desliza hacia los jóvenes trabajadores, lo que se esconde y se

manifiesta a la vez es la profundidad del cambio vivido, pues lo que desapareció en el tránsito de una generación son los marcos sociales y culturales que definían al mundo de los trabajadores urbanos.³¹

Pero si la política de flexibilización logró imponerse —pe-se a la resistencia sindical de ciertos sectores de la UOM, uno de los sindicatos considerado como el portador de la conciencia obrera (peronista)—, la figura más acabada del nuevo modelo de organización del trabajo y relaciones laborales aparece ejemplificada por el sector supermercadista. Allí, el alcance del proceso de individualización de las relaciones laborales, tan asociado a la política de preferencia generacional, se vio facilitado por la existencia en el sector de un sindicato altamente negociador y pragmático, como la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). Recordemos que, durante los 90, las nuevas estrategias de comercialización tuvieron como correlato la caída del pequeño comercio y una creciente concentración del mercado de la alimentación por parte del sector supermercadista, en su mayoría perteneciente a grupos extranjeros. Dicho sector, tradicionalmente más flexible y poco organizado, se reveló en sí mismo como una cantera ilimitada e inagotable para la implementación del nuevo modelo organizativo. Los estudios existentes sobre el sector son contundentes al respecto. En efecto, a las nuevas modalidades laborales basadas en la polivalencia y la flexibilidad contractual, salarial, organizacional, se sumó la expansión de una cultura empresarial que coloca en el centro del dispositivo de control la figura a la vez inasible y todopoderosa del “consumidor” o “cliente”, cuya sola invocación permite recubrir y ampliar la dominación social del capital sobre el trabajo (Contartese, Gómez y Rúfolo:2003). Jornadas extensísimas, sin pago de horas extras; eliminación de los feriados, fuerte rotación de puestos, controles omnipresentes, forman parte de una historia que, si bien es reciente, se halla plagada ya de largos e innumerables abusos, algunos de los cuales han llegado a adquirir cierta trascendencia mediática. En suma, la convergencia de todos estos elementos, a lo que se agrega la tradición pragmática y “empresarial” del sindicato, explican tanto la dificultad de la emergencia de una identidad colectiva (un “nosotros”) (Abal Medi-

na:2004), como también las escasas posibilidades de una subjetivación positiva por medio del trabajo.

En definitiva, en la medida en que el trabajo, concebido de ahora en más como precario e inestable, deja de ser el principio organizador en el proceso de afirmación de la subjetividad, otros componentes, ligados al consumo y, sobre todo, los gustos musicales, adquieren mayor peso. Así, una de las consecuencias de la nueva dinámica laboral es que los modelos de subjetividad emergentes se construyen a distancia del mundo del trabajo, y remiten cada vez más a nuevos registros de sentido centrados en las dimensiones más expresivas del sujeto. Claro que el trabajo continúa siendo (y no podría ser de otro modo) factor de integración social, pero lo que aparece relativizado es su importancia como principio de individualización y como espacio de construcción de un colectivo social, un “nosotros”. Minado por un proceso de individualización que atraviesa todos los niveles de la experiencia, lo que queda del mundo obrero se debate así en la dificultad de existir en términos colectivos.

CULTURA POPULAR Y ESTIGMATIZACIÓN DE LA JUVENTUD: EL HORIZONTE DE LA EXCLUSIÓN

Hemos dicho ya que el declive y la desagregación del mundo de los trabajadores urbanos coinciden con el fuerte avance de la industria cultural y de la influencia de los medios masivos de comunicación en un mercado cada vez más globalizado. Esto cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que los jóvenes pertenecientes a los sectores populares, a diferencia de sus abuelos y en muchos casos, de sus padres, han sido socializados en un medio urbano. Así, aun en aquellos jóvenes cuya situación es de mayor vulnerabilidad y desorganización social y, en el límite, de anomia, las demandas de consumo son las mismas que las de los jóvenes que provienen de otros sectores sociales, con mayores oportunidades de vida (Kessler:2004). Por ello, es probable que el estilo de vida de un joven proveniente de los sectores populares se distancie enormemente del universo de sus mayores y se encuentre más cercano al de un joven que vive en la periferia de las grandes metrópolis, con quien

puede compartir ciertos códigos propios de la cultura urbana actual, un universo expresivo en el cual se instalan las nuevas "industrias de la subjetividad".³² Gustos musicales, lenguaje expresivo, diferentes tipos de vestimentas e identificaciones y, en muchos casos, pasión futbolera, van configurando las nuevas "narrativas" identitarias juveniles. Sin embargo, pese a esta tendencia homogeneizadora, producto de la difusión transversal de los consumos, los modos de apropiación son divergentes, pues también dependen del grupo social de pertenencia.

Sin duda, la oposición a la policía constituye uno de los elementos centrales de la "narrativa" identitaria de las jóvenes generaciones. Esta oposición a la presencia y acción de la policía remite a una experiencia común de persecución y rechazo que sufre gran parte de la población joven en la Argentina, sobre todo, la proveniente de los sectores populares y de las clases medias bajas. Este tópico tiene su origen en la última dictadura militar,³³ pero encuentra una fuerte continuidad en los años de la democracia, de la mano del sistema represivo institucional, encarnado por las siempre inquietantes fuerzas policiales (provinciales y federal). No olvidemos que, desde 1983 en adelante, los jóvenes han sido y continúan siendo las víctimas privilegiadas del ensañamiento policial en los barrios, o a la salida de recitales, a través del gatillo fácil y la represión.³⁴ En consecuencia, el rechazo a la policía, una de las instituciones más cuestionadas de las últimas décadas, posibilita una identificación de base entre los jóvenes, más allá de la diversidad de los orígenes sociales o de los círculos de pertenencia: una experiencia que, por medio de diferentes lenguajes, tiende a poner al descubierto y a denunciar la estigmatización de la juventud como "clase peligrosa", en el límite, encarnación de la "clase sobrante" en el marco de una sociedad excluyente.³⁵

Dicha política de represión y ensañamiento para con los más jóvenes se ha ido cristalizando en una suerte de *ethos* antirrepresivo, cuyo paradigma es el rock barrial o "chabón" de los 90, y más cercanamente, la "cumbia villera". Veamos, aunque sea esquemáticamente, los diferentes sentidos y significados que expresan estos nuevos ritmos musicales.

Como afirman Pablo Semán y Pablo Vila (1999, p. 233), el rock "chabón", propio de los 90, inaugura un nuevo período en

el cual se destaca la presencia de músicos procedentes de los sectores populares (y no casi exclusivamente de los sectores medios y medios altos, como es el caso del rock, entre los 60 y los 80). Siguiendo a dichos autores, el rock "chabón" se define como "el rock de aquellos jóvenes a los que les duele que el mundo de sus padres no exista más, de los jóvenes que encuentran alternativas a su no-lugar en el modelo socio-económico vigente en la expresión musical, en la barra de la esquina, o en pedir prepeando las monedas para la cerveza o la entrada al recital, porque piensan, con algún criterio de realidad, que no podrían encontrar tales alternativas en ninguna versión de la política organizada tal cual está estructurada en la Argentina contemporánea". Con sus letras, que aluden al barrio, a las peleas callejeras, a la oposición a la policía, el rock "chabón" está lejos de encarnar una música de "ganadores". Más bien, al igual que el tango, es un ritmo musical que evoca a los "perdedores" del sistema, a las "víctimas jóvenes de una reestructuración social violenta, abrupta y traumática" (Semán y Vila:1999, p. 249-251). Por último, bien vale la pena subrayar el carácter transversal (clases populares y clases medias) de esta música, que engloba una retórica ambigua y contestataria bastante despolitizada (donde se unen el rechazo a los políticos y una actitud antisistema), así como estilos rockeros muy disímiles entre sí.

Diferente es el caso de los ritmos "bailaneros" (cumbia, cuarteto, "cumbia villera", entre otros), cuyos modos de apropiación, depende del sector social de que se trate. Los sectores medios (o, excepcionalmente, los sectores altos) suelen realizar una apropiación de segundo grado, que lleva implícito un reconocimiento (el carácter festivo de la música, ligado —supuestamente— a su origen plebeyo) y, a la vez, una toma de distancia, donde persiste el reflejo estigmatizador (su carácter de música "villera", propia de las villas miserias).

Una atención especial merece el fenómeno de la "cumbia villera", género surgido a fines de los 90, en el Conurbano Bonaerense. La "cumbia villera" es un ritmo popular urbano que registra una influencia de la cumbia colombiana y del *reggae* y, muy especialmente, del rap —una de las expresiones más importantes de la cultura urbana de los sectores excluidos en las

sociedades actuales—. Según Elisa Martín (2002, p. 26), su irrupción reciente, seguida de una gran mediatización, ha generado diferentes lecturas; desde aquellas que la consideran un discurso de los marginales prontamente absorbido por el mercado, o una expresión de la “decadencia moral y cultural del país”, hasta aquellos otros que romantizan la actitud de rebeldía que conlleva, en continuidad con el rock chabón o barrial.

Desde esta perspectiva, la “cumbia villera” —pese a su carácter no sólo popular, sino marcadamente plebeyo— no puede ser interpretada como un movimiento de resistencia cultural, esto es, como una expresión de los sentimientos de injusticia y desigualdad de parte de los sectores subalternos. Ciertamente vehiculiza temas o tópicos propios de las clases subalternas; sin embargo, tiende a neutralizar su potencialidad al exaltar un modo de vida que, como afirma Miguel Brenner (2001), conduce a legitimar la exclusión y la marginalidad. En este sentido, se caracteriza por un discurso que constituye un “nosotros” negativo, y termina por vaciar de significado el reclamo.

Analicemos algunos de los tópicos centrales de la “cumbia villera”. El primero de ellos se refiere a la mujer, la cual aparece constantemente denigrada y ridiculizada, sobre todo en el plano sexual. La virulencia de estos ataques, lejos de ser casual remite a complejos procesos sociales: nos referimos, por un lado, al fuerte trastocamiento del universo masculino, cuya identidad estaba anclada en el trabajo y en el reconocimiento de su rol como proveedor principal; por otro lado, a la emergencia y afirmación de un protagonismo femenino, como lo atestiguan los movimientos sociales existentes, no sólo en la Argentina, sino en otras regiones de la periferia globalizada. Este doble fenómeno nos ayuda a entender entonces por qué en la última década, dentro del fragmentado espacio popular, se han generado expresiones musicales sexistas, que contienen elementos de una increíble violencia verbal contra la mujer. Más aún, las referencias que aparecen en las letras de la “cumbia villera” apuntan a denigrar y ridiculizar la creciente autonomía (sexual) de la mujer, precisamente en un momento en el cual es notoria su mayor participación —y autonomía— en el campo social y político. En un extremo, aunque realizado en tono festi-

vo, este proceso de impugnación de la mujer refleja la crisis del universo masculino y su imposibilidad de salir del viejo contexto y, por ende, de redefinir positivamente la situación.³⁶ En fin, esta imagen negativa de la mujer aparece como la contracara de un proceso de desestructuración y crisis del imaginario masculino; algo que, necesario es decir, está lejos de ser privativo del caso argentino, pues también constituye un elemento vertebrador de otras expresiones de la cultura urbana popular (como sucede con el rap).

El segundo tópico que aparece en la “cumbia villera” es el repudio a la policía, el que, como hemos dicho, es un tópico constitutivo de la juventud argentina. Así, aun si en la “cumbia villera” muchas de las referencias se insertan en un esquema de oposición concreto (ladrones/policías), su sola mención tiende a evocar una vivencia más amplia, referida a la persecución y represión que sufren los jóvenes. Sin embargo, a diferencia del discurso propio de las organizaciones de derechos humanos (movimientos en contra de la violencia policial) o de otras organizaciones sociales (como H.I.J.O.S. o las diferentes agrupaciones piqueteras), donde el talante antirrepresivo aparece politizado y en perspectiva histórica (la relación entre la última dictadura militar y el aparato policial), la interpelación antirrepresiva propia de la “cumbia villera” no hace más que diluir su potencial antagonico, en la medida en que ésta se inserta en un discurso de exaltación de un modo de vida (el descontrol, la droga, el delito), mediante la afirmación festiva y plebeya del “ser excluido”, cristalizado a través de las imágenes estereotipadas (y estigmatizantes) del “villero” o el “pibe chorro”.

En resumen, los jóvenes de los sectores populares aparecen como la ilustración más acabada de un conjunto de procesos: por una parte, devienen los destinatarios privilegiados del nuevo modelo de relaciones laborales (más flexibles, con pocos vestigios de un pasado de integración social y laboral); por otra parte, aparecen como la expresión por antonomasia de la “población sobrante” (la clase peligrosa). Entre esos dos polos que definen tanto el límite de la inserción como el horizonte de la exclusión, se van configurando los nuevos marcos de referencia de las conductas juveniles, donde conviven desorganizadamente y a veces en tensión, diferentes principios y

valores: la naturalización de la situación alterna con el talante antirrepresivo; el rechazo a los políticos, con una actitud antisistema, pocas veces politizada; la conciencia del horizonte de precariedad duradera, con una necesidad de descontrol de las emociones y las sensaciones.

LAS MUTACIONES ORGANIZACIONALES:
HACIA EL MUNDO COMUNITARIO DE LOS POBRES URBANOS

Como ha sido dicho tantas veces, en la Argentina, el nuevo régimen de acumulación terminó de liquidar la estructura salarial anterior, que ofrecía —diferencias mediante, protección social, estabilidad laboral y derechos sociales. Durante este período de grandes mutaciones, la sociedad argentina no contó con centros de formación o reconversión laboral, al tiempo que fue notable la ausencia de políticas estatales en la materia, todos mecanismos que hubieran compensado, en parte, los efectos de las progresivas medidas de flexibilización laboral o los despidos masivos que acompañaron a los procesos de privatización y de reconversión de empresas en el nuevo contexto de apertura comercial. Asimismo, recordemos que los grandes sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) no se opusieron a las reformas, que virtualmente minaban sus bases de afiliación, sino que negociaron con el gobierno su supervivencia material y política y optaron por readecuarse al nuevo contexto económico y social.

Por otro lado, las redes de reciprocidad y las organizaciones de base existentes, orientadas a la gestión de las necesidades más básicas, fueron ciertamente insuficientes. En realidad, el conjunto de redes y organizaciones territoriales preexistentes remitían tanto a la acción del Partido Justicialista como a la historia de los movimientos de asentamientos.

En efecto, en primer lugar, el Partido Justicialista, desde sus orígenes movimientistas, se caracterizó por desarrollar y sostener una multiplicidad de organizaciones heterogéneas dentro del mundo popular. Aun durante los 90, esa vasta "organización informal" estaba constituida por una densa colección de redes personales, que operaban desde los sindicatos, los clubes,

las ONG y, con frecuencia, desde la casa de los militantes (Levitsky:2001, p. 8). Esas redes desarrollaban varias actividades, desde las específicamente políticas, hasta las sociales y recreativas. En segundo lugar, el proceso de tomas de tierras que se desarrollaron desde fines de la dictadura militar fue originando también un conjunto de organizaciones territoriales, asociadas a la lucha por la propiedad de la tierra y a la organización de la vida del barrio alrededor de los servicios básicos (calles, agua, energía eléctrica, la sala de salud, entre otros) (Merklen:2000). Como en otros países de América Latina, estas acciones fueron consolidando un modelo de acción territorial, típico de los movimientos sociales urbanos, cuyas demandas estarán orientadas fundamentalmente hacia el Estado.

Ahora bien, el reconocimiento de una cierta continuidad no nos exime de analizar las rupturas registradas en el mundo popular y sus formas organizacionales, del que sólo una visión más abarcadora de la problemática (relativa tanto a las transformaciones de los sectores populares, como a los vínculos entre las esferas micro y macrosocial), puede dar cuenta acabadamente.⁸⁷ En efecto, a partir de 1987, año en que Antonio Cafiero asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hasta el presente, los diferentes gobiernos (en su mayoría de signo justicialista) fueron multiplicando las formas de intervención más específicamente políticas en el mundo popular, que encontrarían su expansión durante el gobierno de Menem. Los primeros ensayos de asistencia alimentaria de los 80 fueron seguidos por una política más sistemática de ayuda social, que incluía la salud y la infancia. Asimismo, no hay que olvidar que entre 1991 y 1997, en la medida en que el paisaje urbano fue perdiendo sus rasgos tradicionales, hasta convertirse en un verdadero cementerio de industrias y pequeños comercios, la política en los barrios tendió a recluirse en su dimensión más asistencial, despojándose de sus lazos tanto con la militancia política como con el mundo sindical. Las razones de tal inflexión son variadas y complejas: el telón de fondo es, sin duda, el triunfo del peronismo en su versión neoliberal. En este sentido, la inflexión debe explicarse también a la luz de los cambios impuestos por el nuevo modelo de gestión.

En la primera parte de este libro, cuando abordamos los

rasgos mayores del modelo de dominación política, hicimos referencia a un modo de "hacer política" vinculado al discurso neoliberal y el mandato de los organismos multilaterales, elemento central de un nuevo modelo de gestión. Ese modelo se basa en tres presupuestos centrales: la división del trabajo político por medio de la profesionalización de las funciones, la política de descentralización administrativa y la focalización de la ayuda social. Estos tres ejes de la política neoliberal fueron la clave para la reformulación desde el Estado de la relación con las organizaciones sociales, peronistas y no peronistas. Así, el pasaje de la fábrica al barrio se fue consolidando a través de la articulación entre descentralización administrativa, políticas sociales focalizadas y organizaciones comunitarias, lo cual trajo consigo una reorientación de las organizaciones locales.

En efecto, las nuevas estrategias de intervención territorial fueron produciendo un entramado social en el cual se insertaron las organizaciones comunitarias, fuertemente dependientes de la ayuda del Estado. En este nuevo contexto, muchas organizaciones, embriones de movimientos sociales urbanos, terminaron por perder su potencial político o su originaria vocación por la autonomía, subsumidas o neutralizadas por el nuevo estilo de gestión. En rigor de verdad, muy pocas organizaciones contaban con los instrumentos necesarios como para insertarse dentro del nuevo campo político-social, preservando un espacio de relativa autonomía y una identidad propia. Como señala Pablo Forni (2001), una mirada retrospectiva muestra que las organizaciones comunitarias que lograron sobrevivir en un contexto de hegemonía del peronismo y, al mismo tiempo, de precariedad y escasez de recursos, lo hicieron gracias a que establecieron lazos con fundaciones y ONG, y/o porque tendieron a articularse en redes, junto con otras organizaciones comunitarias.

El impacto de este nuevo modelo de dominación política no fue menor, tal como aparece ilustrado por el movimiento villero, cuyo *ethos* estaba vinculado de manera indisoluble a la lucha por las tierras. Como ha sido analizado por Sabina Fréderic para el caso de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, a partir de 1990, la política local se abocó a cuestionar la movilización, instrumento y base de la acción del movimiento

villero en su relación con el gobierno local, como mecanismo de construcción de la política (Fréderic:2004, p. 101). Así, la nueva política local produjo hondas transformaciones: por un lado, impulsó la consolidación de una clase política más diferenciada en el ámbito local (una elite de gestores), respecto de los vecinos y los villeros; por otro lado, promovió una nueva figura de mediador, el "militante social" de los barrios. Siempre siguiendo a Sabina Fréderic, esta nueva división del trabajo terminó por ampliar y reproducir los efectos desmovilizadores: así, mientras que el trabajo específicamente político quedaba en manos de "los profesionales", instalados en el municipio, la acción del nuevo "militante social", de carácter asistencial, quedaba prácticamente encapsulada en el territorio.

Sin embargo, "desde arriba", la política de focalización fue acompañada también por una "recentralización" de la ayuda social, como lo ejemplifican los ATN discrecionalmente distribuidos desde las oficinas del Ministerio del Interior a las diferentes provincias y el ya olvidado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense (FRHCB). Recordemos que los fondos de inversión social en América Latina surgieron como una estrategia compensatoria a lo que dio en denominarse "las consecuencias sociales negativas del ajuste estructural" (Chiara, Danani y Filc:2000). Es en este contexto donde fue creado en 1992 el FRHCB, dada la insuficiencia de los recursos de coparticipación federal para afrontar las necesidades del Conurbano, cuya población presenta índices muy bajos de cobertura de servicios públicos y una alta proporción con necesidades básicas insatisfechas (Chiara, Danani y Filc:2000, p. 232)⁹⁸.

El proyecto fue convertido en ley cinco meses después de que Eduardo Duhalde asumiera como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y tuvo vigencia hasta diciembre de 1997. La ley decretaba que el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias sería destinado al fondo de financiamiento de programas sociales en el Conurbano Bonaerense. Igualmente, la oposición de algunos gobernadores hizo que este porcentaje fuera sustituido por una suma fija de 650 millones de pesos/dólares, equivalente al 10% de la recaudación total. Estos fondos, controlados por un ente autónomo, dependiente directamente del gobernador, se destinaron a la realización de

obras públicas. Así, durante este período, el FRHCB se convirtió en el principal productor de intervenciones sociales en la Región Metropolitana de Buenos Aires, con un fuerte impacto sobre las condiciones de vida de los sectores populares, así como sobre la reorganización de las relaciones políticas, tanto en el ámbito provincial como en el municipal.

En efecto, desde el punto de vista político, el FRHCB permitió a Duhalde afianzar su liderazgo a partir del disciplinamiento y la reorganización de las relaciones políticas en la provincia. La personalización y monopolización del gasto social contribuyó también a cimentar su popularidad y sobre todo, a impulsar la de su esposa, Hilda Duhalde, quien a partir de 1993 y desde el entonces Congreso Provincial de la Mujer, fue asumiendo competencias del área de programas sociales del ente, a cargo de las relaciones con las organizaciones intermedias, así como de la gestión del financiamiento iniciados por éstas (Chiara, Danani y Filc:2000, pp. 247-248). Sin duda, estos esfuerzos tuvieron su corolario a mediados de los 90, con la creación de una red de "manzaneras" (Plan Vida), que produjo una reorganización de la política en función del mediador barrial, cuyo alcance en términos de "red de resolución de problemas", tanto como su eficacia simbólica (la identificación con un estilo "evitista"), fue analizada sobre todo por Javier Auyero (1997).

En otras palabras, el Partido Justicialista, desde las distintas instancias del Estado (nacional, provincial, municipal), tanto por intermedio de las nuevas estructuras de gestión (descentralización y nueva división del trabajo político), como de los "viejos" estilos centralizados, comandó la reorientación organizacional del mundo popular. Así, tras la crisis del mundo de los trabajadores urbanos fue asomando cada vez más un mundo caracterizado por redes y organizaciones territoriales, atravesado por nuevas formas de "clientelismo afectivo". Por clientelismo afectivo entendemos un tipo de relación que expresa la convergencia aleatoria entre la dimensión utilitaria de la política, generalmente reforzada por la omnipresencia de demandas dirigidas hacia las instituciones políticas, y la dimensión afectiva, manifiesta en las diferentes modalidades de identificación con los líderes.³⁹ El clientelismo afectivo se fue convirtiendo en una manera relativamente estable de definición del

vínculo político "desde abajo" en el período pospopulista. Más aún, éste triunfó allí donde el peronismo fue debilitándose como marco de interpretación de la vida política y social, es decir, a partir del abandono de políticas públicas integradoras, reduciéndose cada vez más a la articulación entre un conjunto de políticas sociales asistenciales que invocaban una visión consensual o no conflictiva de la política, y un conjunto de eficacias simbólicas que interpelaban los orígenes familiares, la tradición local, las imágenes de la lealtad o, más simplemente, el recuerdo de que "los otros son peores".

En resumen, trabajosamente, en medio de la crisis y la desaparición de las instituciones típicas de la sociedad salarial, estas redes territoriales se fueron densificando y orientando cada vez más a la gestión de las necesidades básicas, configurando de manera incipiente los contornos de un nuevo proletariado, multiforme y heterogéneo, caracterizado por la autoorganización comunitaria.

MUNDO PERONISTA, BRECHAS CULTURALES Y NUEVAS MILITANCIAS

Las mutaciones del mundo popular urbano ocurridas durante los 90 conllevaron también una transformación del peronismo, no sólo en el nivel organizacional, sino en el plano de la subjetividad. En rigor, la transformación del peronismo en los sectores populares encuentra tres grandes inflexiones: una primera se produce durante la etapa inicial del gobierno de Menem (1989-1995), y aparece asociada al debilitamiento del peronismo en términos socio-culturales; una segunda inflexión arranca en 1996/97, y está directamente vinculada al desarrollo de formas de (auto)organización de lo social y nuevas figuras de la militancia territorial, por fuera de y confrontadas con la estructura del partido peronista. Por último, una tercera inflexión se produce a partir de 2002, como producto de la masificación de los planes sociales en el empobrecido mundo popular.

La primera inflexión es de índole socio-cultural y presenta dos aspectos íntimamente ligados: el debilitamiento del peronismo en términos identitarios y la difusión de culturas alternativas, que conducirá a la multiplicación de los grupos de perte-

nencia. La primera brecha socio-cultural aparece manifiesta en la dificultad de transmisión del peronismo en el marco familiar, que remite tanto a las consecuencias sociales que tendría el viraje neoliberal del Partido Justicialista, al tiempo que nos advierte sobre la importancia creciente de otros ejes de construcción identitaria. Ya hemos hecho referencia al debilitamiento de las identidades definidas en torno al trabajo y la política, y a la reorganización de la identidad alrededor de otros ejes, como el consumo. En efecto, más allá de la socialización aún observable en el nivel electoral, a mediados de los 90 se fue diseñando un corte claro que remite tanto al desapego creciente de los jóvenes hacia la política como al hecho de que el peronismo dejó de ser, para ellos, el núcleo de una vivencia social. A su vez, este proceso de debilitamiento del peronismo en la cultura popular coincide con el fuerte avance de la industria cultural en un mercado cada vez más globalizado.

Por otro lado, la segunda brecha, también de orden socio-cultural, fue introducida por las religiones alternativas. Esto se comprende mejor si tenemos en cuenta que, durante mucho tiempo, la hegemonía del peronismo en los sectores populares se tradujo en una suerte de homogeneización político-cultural, expresada en la subordinación y, en el límite, en la deslegitimación de otras prácticas o creencias populares. Además, recordemos que, desde sus orígenes, el peronismo estuvo estrechamente asociado a los valores de la cultura católica, más allá de los duros enfrentamientos entre Iglesia y Estado registrados en las postrimerías del segundo gobierno de Perón. A fines de los años 60, esto es, luego del Concilio Vaticano II, la convergencia entre peronismo y catolicismo se expresaría también a través de las nuevas tendencias, desde el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo hasta la Teología de la Liberación latinoamericana. Durante los 70, esta articulación entre peronismo popular y Teología de la Liberación fue visible en las experiencias de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), así como en el peronismo revolucionario. La máxima expresión de esta convergencia entre catolicismo y revolución fue el sacerdote Carlos Mujica —asesinado en 1975 por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina)—, cuya acción social estaba ligada al movimiento villero de la ciudad de Buenos Aires.

A esta escalada represiva, desarrollada en el nivel continental por los diferentes gobiernos autoritarios que se instalaron en la región, le siguió una fuerte embestida institucional, llevada a cabo por el Vaticano. En efecto, la Teología de la Liberación, caracterizada por su "opción por los pobres", fue sistemáticamente perseguida y sus principales teólogos fueron disciplinados, durante el pontificado de Juan Pablo II. Amén de ello, en la Argentina, la política institucional del Vaticano coincidió con la llegada de Menem al poder. Aun así, no es casual que en los 80 y 90, en un panorama que mostraba a la vez el viraje neoliberal del peronismo y la hegemonía de las corrientes más ortodoxas dentro de la Iglesia Católica, las CEB apoyaran y contribuyeran a la emergencia de nuevas organizaciones sociales, construidas a distancia del peronismo neoliberal y sus estructuras clientelares.

Ahora bien, lo notorio durante los 90, fue el vertiginoso crecimiento de las religiones pentecostales y evangelistas dentro de los sectores populares, lo cual quebró la ilusión del monopolio de lo popular por parte del peronismo, estrechamente asociado al catolicismo. Más aún, en la Argentina, en la medida en que el peronismo iba perdiendo la capacidad de ensamblar la experiencia popular en una sola cultura política, expulsando los elementos renovadores (CEB), las nuevas religiones fueron constituyendo otros focos de pregnancia significativa.

Dichos cambios socioculturales, suerte de resquebrajamiento o de brechas dentro del peronismo popular, dan cuenta menos del final del mundo peronista que de su mutación, al tiempo que ponen en evidencia la heterogeneidad creciente del mundo popular. Sin embargo, ni la interpelación de los más jóvenes, seducidos por las nuevas imágenes del consumo, ni la expansión de las religiones-movimiento, significaron un cuestionamiento mayor del peronismo en términos políticos. Lo mismo sucedía con el universo abigarrado de las religiones, ya que, como señalan algunos estudios (Semán:2000), existe una afinidad electiva entre el *corpus* doctrinario de aquéllas y los supuestos culturales de los grupos populares. No por casualidad, muchos de los/as pastores/as poseen antecedentes de trabajo territorial dentro del partido peronista. Por otro lado, leída desde el presente, la expansión de las nuevas religiones revelaba

una suerte de paradoja: pues si las religiones-movimiento aparecían como portadoras de la posibilidad de recomponer el lazo social como lazo comunitario, frente al avance de una dinámica privatizadora y sus previsibles consecuencias disgregadoras para la solidaridad social, no es menos cierto que ellas ilustraban una determinada visión de lo comunitario que implicaba una resignificación desde la esfera privada, despojada de una dimensión específicamente política. En otras palabras, esta nueva resignificación del lazo social desde lo privado no entra en contradicción con las prácticas políticas del peronismo. Estas podían convivir y, más aún, articularse con la cultura política peronista.

No sucedería lo mismo respecto de "la segunda inflexión", que desbordó claramente la esfera cultural-religiosa, para insertarse en el registro organizacional-político. Esta aparece ejemplificada por el surgimiento y expansión de las organizaciones piqueteras, muchas de ellas definidas por fuera y más aún, en confrontación con las estructuras tradicionales del Partido Justicialista. Sin embargo, lo más importante no es tanto que las nuevas organizaciones confronten o negocien con el peronismo, sino las condiciones —los supuestos— desde las cuales se entabla dicha relación, pues la acción de las organizaciones piqueteras tuvo como punto de partida la resignificación política de la militancia socio-territorial preexistente. Pero, una vez dicho esto, uno podría preguntarse cuáles son los rasgos novedosos de esta militancia territorial, ligada a las organizaciones de desocupados, habida cuenta de la tradición organizativa existentes en los asentamientos, así como de la histórica presencia del peronismo en los barrios. Tratemos, pues, de responder por partes esta pregunta.

Recordemos que, pese a que la militancia socio-territorial tuvo un cierto desarrollo durante los movilizadores años 60 y 70 —sobre todo, asociado al trabajo de base realizado por sacerdotes tercermundistas y militantes católicos de clase media—, ésta adoptará nuevos rasgos a partir de los años 80 y más claramente, durante los 90, a raíz del agravamiento de las condiciones de vida de los sectores populares y su desconexión con el mundo del trabajo formal. De esta manera, en el marco de una matriz social más comunitaria, el trabajo territorial fue adquiriendo

una cierta "autonomía relativa" respecto de los sindicatos y la militancia política tradicional. Sin embargo, las nuevas estructuras de gestión desarrolladas a lo largo de los 90 apuntaron a reformular la relación con las organizaciones populares preexistentes, y tendieron a definir el grado o los límites de esa "autonomía relativa", en el marco de una militancia local, de tipo social y deliberadamente despolitizada. Ya hemos señalado, siguiendo a Sabina Fréderic, cómo el discurso oficial, mediante la puesta en marcha de la nueva política social focalizada, apuntó a proyectar la idea de que el nuevo "militante social" ofrecía un perfil más profesional, menos "contaminado" por el mundo de la política. Así, el predominio de las mujeres no era casual, como bien lo ilustran las "manzaneras", mediadoras del Plan Vida, que dependía directamente de Hilda Duhalde. Más simple, a diferencia del militante político de las décadas pasadas, la nueva figura del militante social tenía la ventaja de presentar un perfil "despolitizado" y, por ende, menos problemático, condición *sine qua non* en un contexto de transformaciones del peronismo desde arriba y de creciente empobrecimiento desde abajo. Ciertamente es que esta despolitización y encapsulamiento de la militancia en los barrios no estaba exenta de tensiones. Cada tanto, algún hecho dramático que ocurría en los barrios permitía que los "antiguos" militantes políticos peronistas asomaran el rostro, desafiantes, reivindicando la memoria de las luchas y el sentido mismo de la práctica política.⁴⁰

A mediados de la década del 90, y pese a los esfuerzos del Partido Justicialista por "encapsular" —la expresión es de Marcela Woods (1998)— la acción política en los barrios, esta dinámica territorial estará en el origen de un nuevo *ethos* militante, que tendrá por protagonistas a las incipientes organizaciones de desocupados. En el origen de esta brecha política cobra relevancia el carácter abusivamente clientelar y manipulador del peronismo, así como la escasez de recursos, en un contexto de cruda descolectivización y pauperización masiva de los sectores populares. En este escenario, el clientelismo afectivo se fue transformando y, al mismo tiempo, encontrando obstáculos, atrapado en una dinámica paradójica que muestra la convivencia entre un sistema clientelar múltiple, que tendía a impulsar las conductas oportunistas, y un discurso anticlientelar que co-

menzaba a difundirse en el ámbito barrial y que apuntaba al Partido Justicialista. En el marco de esta nueva situación, en la cual la extensión de la crisis no constituye un dato menor, y en un escenario atravesado por las nuevas movilizaciones que se producían en el interior del país (los primeros piquetes y puebladas de las localidades petroleras), la figura del militante social, dependiente del aparato del Partido Justicialista, terminó por mostrar sus límites.

Finalmente, la redefinición activa de la situación vendría de la mano de militantes de la izquierda (ex delegados sindicales y dirigentes de asentamientos), por fuera del Partido Justicialista⁴¹. Fueron ellos quienes encabezaron las primeras marchas, junto con las mujeres (esposas o jefas de hogar), algunas de las cuales provenían de la militancia social, impulsada por el Partido Justicialista en los 90, desde las nuevas estructuras de gestión estatal. De esta manera, a partir de 1997, en especial, el territorio del Conurbano Bonaerense, sede de las primeras organizaciones de desocupados, se fue erigiendo en un escenario de confrontación y, a la vez, de reconocimiento y negociación, con los punteros barriales del Partido Justicialista y las nuevas estructuras de gestión del Estado, en sus diferentes instancias (municipal, provincial, nacional). En fin, más allá de sus diferentes alineamientos políticos y sindicales, las organizaciones van a reconocer como fuente originaria el "trabajo territorial", asentado sobre un modelo de representación que algunos sintetizarán en la figura del "delegado de base" y otros del "dirigente comunitario" o simplemente "referente territorial".

En un doble registro, que señala a la vez líneas de continuidad y de ruptura, la acción barrial ligada a la gestión de las necesidades básicas se irá dotando de (nuevos) registros de significación, esta vez específicamente políticos. Continuidad: porque, en definitiva, la militancia social (impulsada en los 90, desde las nuevas estructuras de gestión) va a consumir —aún en la actualidad— una buena parte de la energía de las agrupaciones. No es raro, entonces, que en el marco de una pauperización creciente de los sectores populares, la tarea asistencial reclame urgencia y, más aún, acción inmediata, visible en la centralidad que cobran el comedor, la salita de salud y la panadería comunitaria. Ruptura: pues la politización del modelo de

intervención territorial tendrá como corolario la emergencia de un nuevo *ethos* militante, ejemplificado por formas de organización política y acción colectiva, cuyas marcas mayores serán la acción directa, la autoorganización, así como una importante dinámica asamblearia.

En consecuencia, durante los años 90, el peronismo, en tanto lenguaje político desde el cual los sectores populares inteligían la dominación social, se desdibuja aceleradamente, al tiempo que diferentes organizaciones territoriales, a través de nuevas formas de acción colectiva, vehiculizan fuertes apelaciones a la dignidad y la lucha. Así, entre 1997 y 2002, el surgimiento de nuevas organizaciones de tipo territorial, aunque no llegó a cuestionar la hegemonía del peronismo, puso en evidencia no sólo el deterioro de la relación entre el peronismo y el mundo popular, sino también la posibilidad de la politización de lo social. Más aún, esta nueva experiencia se va a apropiarse y va a actualizar las apelaciones más plebeyas del mundo popular, tan asociadas al peronismo de otras épocas, como expresión auténtica de la gente "de abajo".

Sin embargo, la posterior evolución de las organizaciones de desocupados no es ajena a la tensión originaria, que instala la acción territorial en el doble registro de la continuidad y la ruptura. Una nueva etapa se abrió así con la masificación de los planes sociales, a partir de 2002. En efecto, independientemente de la afirmación de la emergencia de nuevas prácticas políticas (véase la parte III de este libro, consagrada a la acción colectiva), resulta difícil minimizar el impacto que la nueva política social implementada luego de la crisis de 2001-2002 ha tenido en el empobrecido mundo popular. Recordemos que, a partir de este período, el gobierno nacional lanzó un nuevo programa social, el Plan Jefas y Jefes de Hogar, que en marzo de 2005 alcanzaba, según estimaciones oficiales, a 1.561.000 desocupados (Lozano:2005). Es importante señalar que sólo cerca del 10% de esos planes son directamente controlados por las organizaciones piqueteras.

Ahora bien, los nuevos planes conllevaron un fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo neoliberal. Por una parte, la entrega de subsidios compensatorios (planes sociales) muestra una clara continuidad con las políticas anteriores, pues

tiende a fijar su "inclusión" como excluidos. Esto se ve complementado con el otorgamiento de subsidios para los emprendimientos productivos (orientados a la autoconstrucción y pequeñas unidades de producción), que exige la autoorganización de los pobres, lo cual complejiza y transforma así el modelo de ciudadanía asistencial-participativo que el neoliberalismo reserva a los excluidos.

En definitiva, durante los 90 y en plena reforma neoliberal, la persistencia del peronismo "desde abajo" fue acompañada de grandes transformaciones. Vaciado de sus contenidos fundacionales, éste dejó de ser una contracultura política y pasó a expresar una lógica de dominación, asentada casi exclusivamente en las multiplicadas formas del clientelismo afectivo. En este sentido, tocaría a las organizaciones de desocupados la tarea de abrir una brecha en este transformado mundo popular, por fuera del peronismo, tornando posible que emergieran nuevas prácticas políticas, a través de la resignificación de la militancia territorial, cuyos ejes serían precisamente la crítica al clientelismo y la afirmación de la dignidad. Sin embargo, durante el gobierno provisional de Duhalde (2002-2003) y luego, con Néstor Kirchner (2003), el peronismo retomó la iniciativa en la tarea nada fácil de recomponer las relaciones con los sectores populares, con la idea de "recuperar" y, al mismo tiempo, cerrar el espacio abierto por las nuevas organizaciones territoriales. Paradójicamente, la crisis de 2001 otorgó al peronismo una nueva oportunidad histórica, pues le permitió dar un enorme salto a partir de la masificación de los planes asistenciales. Por otro lado, este proceso se vio fortalecido por la dinámica de reperiencia de importantes organizaciones piqueteras (Federación de Tierra y Vivienda, Barrios de Pie), caracterizadas por una fuerte matriz populista.

En fin, una vez más, recordemos que el pasaje que va "de la unidad básica al comedor comunitario" (Grimson:2003) arranca en los 80, con los primeros planes sociales que instaura el gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires, y en el nivel nacional, el gobierno de Alfonsín; pero éstos forman parte de una política más sistemática a lo largo de los 90, y finalmente, entran en una nueva etapa en el año 2002, a partir de la masificación de los planes sociales, realizada bajo el gobierno de

Duhalde y reconfirmada por Kirchner. En este nuevo escenario, los dispositivos del clientelismo afectivo se potenciaron y, a la vez, se transformaron, asegurando así la reproducción del peronismo "desde abajo". Así, olvidadas la promesa de universalización de los planes y, al mismo tiempo, canalizada políticamente la "ilusión populista" que ilustran determinados sectores organizados, el peronismo logró, una vez más, legitimar su vínculo con los sectores populares.

* * *

Nunca está de más recordar cuán necesario resulta contextualizar y comparar los efectos de las nuevas políticas neoliberales en diferentes países de América Latina. Con esto que-remos decir que, pese "a los aires de familia" (Torre:1998), el impacto que la implantación del modelo neoliberal tuvo sobre el mundo popular latinoamericano, tan marcado por la experiencia populista, está lejos de ser el mismo en todos lados. En Bolivia, donde existió un movimiento obrero combativo y persisten estructuras comunitarias fuertes, la resistencia popular fue importante. Más aún, durante los 90, el neoliberalismo revitalizó elementos comunitarios preexistentes, que terminaron por ser repolitizados, para formar parte de un proyecto antagónico respecto del modelo de acumulación vigente. En Chile, en cambio, el modelo neoliberal —considerado "exitoso" en términos generales— terminó por liquidar y neutralizar los fuertes elementos comunitarios presentes en ciertas experiencias políticas, que durante los 80 habían sido consideradas como portadoras de elementos antagónicos o alternativos (el caso del movimiento de pobladores).

En la Argentina, la reconfiguración de la matriz popular en términos territoriales/comunitarios apareció como una exigencia —y una creación, a la vez desde arriba y desde abajo— para contener el conflicto social, frente a la destrucción del mundo obrero popular. En medio de cambios de todo orden, el *ethos* de las clases populares, ligado a la lucha sindical y la toma de tierras, sufrió un impacto mayor, en virtud de su vínculo estrecho e ineludible con el Partido Justicialista que, desde los diferentes niveles del Estado, sería el encargado de llevar a cabo

las llamadas reformas estructurales. Así, a fines de los 90, la nueva matriz popular indica tanto el declive del mundo obrero (la dificultad de construir un "nosotros" desde la esfera del trabajo), como la emergencia de un conjunto heterogéneo de organizaciones territoriales que poco tienen que ver con el mundo de los trabajadores urbanos que se extendió entre los años 40 y los 70, y mucho más con el mundo comunitario de los pobres urbanos, al igual que en otros países de América Latina.

Dichas organizaciones comenzaron a desarrollarse en los 80, pero registraron un nuevo impulso durante la crisis hiperinflacionaria del 89, al tiempo que sufrieron una fuerte reorientación durante los 90, cuando se implementó un nuevo modelo de gestión. En fin, aquéllas se tornaron definitivamente visibles luego de la gran crisis de 2001. En la actualidad, este nuevo tejido territorial, cuyos contornos asoman a partir de la multiplicidad de las redes de sobrevivencia y la experiencia de la segregación socioespacial, abarca un conjunto muy vasto y heterogéneo de organizaciones, desde ONG fuertemente disímiles (según los rubros y el carácter de ellas); organizaciones religiosas, en su gran mayoría jerárquicas y verticalistas; diferentes agrupaciones piqueteras, que realizan un trabajo de organización territorial, a la vez social y político; en fin, comedores y sociedades de fomento, muchos de ellos fuertemente vinculadas al poder político. Sin embargo, más allá del carácter político o despolitizado de la acción, del alcance innovador o meramente reproductivo de las organizaciones, el nuevo modelo coloca en el centro la figura del militante social, mediador imprescindible en el mundo de las necesidades básicas, cuyo conocimiento, en toda su extensión y complejidad, es todavía una tarea pendiente.⁴²

En suma, en el marco de este proceso de reconfiguración territorial, surge un nuevo proletariado, multiforme, plebeyo y heterogéneo, que no sólo es el asiento de prácticas ligadas al asistencialismo y al clientelismo afectivo, promovidas centralizada o descentralizadamente desde diferentes instancias y organizaciones, sino también el *locus* de nuevas formas de resistencia y prácticas políticas.

TERCERA PARTE

LA ACCIÓN COLECTIVA: DE LA CRISIS A LAS NUEVAS FORMAS DE RESISTENCIA AL MODELO NEOLIBERAL